

**UNIVERSIDAD SAN PEDRO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA**



**“LA IMPORTANCIA DE LAS CONVENCIONES  
PROBATORIAS EN EL PROCESO PENAL”**

**TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL**

**AUTOR:**

**YERETT MILENA RODRÍGUEZ CARLOS**

**ASESOR:**

**MG. PATRICIA BARRIONUEVO BLAS**

**CHIMBOTE - PERÚ**

**2019**



**PALABRAS CLAVES:**

<b>TEMA</b>	<b>LA IMPORTANCIA DE LAS CONVENCIONES PROBATORIAS EN EL PROCESO PENAL</b>
<b>ESPECIALIDAD</b>	<b>PENAL</b>

**KEYWORDS**

<b>TOPIC</b>	<b>THE IMPORTANCE OF EVIDENTIARY CONVENTIONS IN CRIMINAL PROCEEDINGS</b>
<b>SPECIALITY</b>	<b>PENAL</b>

## **DEDICATORIA**

EL PRESENTE TRABAJO ESTA DEDICADO A MI MADRE FLOR CARLOS ZUÑIGA, MI PADRE ROMAN RODRÍGUEZ PAREDES Y MI HIJO YESU RODRÍGUEZ.

### **AGRADECIMIENTO:**

Agradezco a Dios por darme la vida, sobre todo por haberme dado unos padres maravillosos, que con su apoyo en el día a día hicieron posible que culmine mi carrera profesional, a mi hijo por ser mi motivo de superación y lucha constante.

## ÍNDICE

• PALABRAS CLAVES.....	3
• DEDICATORÍA.....	4
• AGRADECIMIENTO.....	5
• RESUMEN.....	7
<b>II.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....</b>	<b>9</b>
3.1 LA ETAPA INTERMEDIA.....	10
3.1.1 CONCEPTO.....	10
3.1.2 FUNCIONES.....	11
3.1.3 CARACTERÍSTICAS.....	12
3.1.4 FASES.....	14
3.1.5 PROCEDIMIENTO.....	16
<b>III.- MARCO TEÓRICO.....</b>	<b>21</b>
<b>LAS CONVENCIONES PROBATORIAS</b>	
4.1 CONCEPTO.....	21
4.2 BASE LEGAL.....	22
4.3 CONVENCIONES PROBATORIAS Y PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL.....	24
4.3.1 PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL.....	25
4.3.2 PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL.....	26
4.3.3 PRINCIPIO DE BUENA FE Y LEALTAD PROCESA.....	31
4.3.4 APLICACIÓN DE LAS CONVENCIONES PROBATORIAS EN LA ETAPA INTERMEDIA.....	31
<b>IV.- ANÁLISIS DEL PROBLEMA.....</b>	<b>37</b>
<b>V.- CONCLUSIONES .....</b>	<b>38</b>
<b>VI. RECOMENDACIONES.....</b>	<b>39</b>
<b>VII.- REFERENCIA BIBLIOGRAFICAS.....</b>	<b>40</b>

**LA IMPORTANCIA DE LAS CONVENCIONES PROBATORIAS EN EL PROCESO**

se inicia analizando la figura las convenciones probatorias, y tiene como objetivo principal determinar y explicar cuál es la importancia de la aplicación de las convenciones probatorias en el Proceso Penal, específicamente en la etapa intermedia. La figura jurídica de la Convenciones Probatorias se encuentra regulado en el artículo 352° numeral 4 del Código Procesal Penal, esta institución tiene como propósito que las partes procesales convengan, acuerden autoriza a las partes, formulada acusación fiscal, proponer tanto los hechos que aceptan y que el juez dará por acreditados, cuanto los medios probatorios que serán necesarios para que determinen hechos se estimen probados, de manera que se produce una simplificación del proceso, en aras de la celeridad y economía procesal. La idea material que preside esta novísima institución es que solo se prueba los hechos controvertidos, salvo que se trate de hechos especialmente relevantes, presupuesto de los hechos no controvertidos. Por consiguiente, hechos controvertidos son todos aquellos hechos relevantes, rechazados de uno u otro modo por alguna de las partes, y que no han sido materia expresa de una convención probatoria, bajo el entendido que el silencio sobre un hecho no puede considerarse en caso alguno como admisión. En esta perspectiva, se acepta la limitación probatoria respecto de los hechos admitidos expresamente, que son aquellos en que ambas partes están de acuerdo en cuanto a su producción-, salvo que se sospeche fraude o que la ley exija una acreditación específica. Solo en este supuesto se entiende que la prueba se torna innecesaria.

La extensión de la convención probatoria es amplia: se puede aceptar el hecho principal y discutir ámbitos secundarios, así como es posible aceptar medio de prueba específicos para probar un hecho concreto, circunscribiendo de este modo la libertad de prueba, cuya tolerabilidad está en el consenso entre las partes.



## **II.-**

## **DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA**

### **LA IMPORTANCIA DE LAS CONVENCIONES PROBATORIAS EN EL PROCESO”**

se inicia analizando la figura las convenciones probatorias, y tiene como objetivo principal determinar y explicar cuál es la importancia de la aplicación de las convenciones probatorias en el Proceso Penal. La importancia de la aplicación de las convenciones probatorias en el Proceso Penal radica en la maximización de los siguientes fundamentos jurídicos: A) EL PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL; B) EL PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL; C) APLICACIÓN EN ETAPA INTERMEDIA; y D) EL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN.

LAS CONVENCIONES PROBATORIAS SON UNA INSTITUCIÓN PROCESAL QUE SE ENCUENTRA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 350° INCISO 2) Y 352° INCISO 6) DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, Y CONSISTE EN EL ACUERDO DE HECHOS PROBADOS POR LAS PARTES PROCESALES.

En cuanto a la bibliografía, la misma ha sido especializada, encontrando tanto autores nacionales como internacionales que manejan el tema en mención.

## **1. LA ETAPA INTERMEDIA**

### **A. Concepto**

Se constituye como la segunda etapa del proceso penal y está referida a la serie de actuaciones procesales que tiene lugar desde que concluye la investigación preparatoria hasta la emisión del auto de citación a juicio (arts. 343.1 y 345 NCPP). Su base legal se encuentra en la Disposición de conclusión de investigación preparatoria: art. 343.1 NCPP o, en su defecto, en el auto de conclusión: art. 343.3 NCPP (San Martín; 2015, 367). En cuanto a su función como filtro, existen múltiples enfoques que lo fundamentan, relacionados con el análisis económico del derecho, con la gestión de audiencias, con la justicia restaurativa, así como con criterios de merecimiento y necesidad de pena. Todos estos criterios concurren en la audiencia preliminar de la fase intermedia para impedir que se continúe un juicio que puede concluir por medio de negociación, por medio de reparación, por un análisis de costo beneficio, o simplemente porque la pena no es necesaria (Ramos; 2007, 29).

Puede definirse como aquella etapa en la que tras el examen de los resultados de la investigación preparatoria se decide sobre la denegación o el reconocimiento de la pretensión penal mediante un examen de sus presupuestos materiales y procesales, ordenando en consecuencia la apertura del juicio o el sobreseimiento de la causa. Desde el punto de vista procedimental la etapa intermedia es bifronte, pues mira, de un lado, a la investigación preparatoria, para resolver su correcta clausura o el archivo

de la causa (arts. 345.2, 346.5, 346.1, 347.2 y 352.4 NCPP). Tiene autonomía propia (San Martín; 2015, 367).

## **A. Funciones**

Está sujeta a dos grandes funciones: principal y secundaria o accesorio.

### **a) Función Principal**

Su objeto es el examen de la fundamentación fáctica y jurídica del requerimiento fiscal y de los presupuestos de admisibilidad del juicio oral; revisa, por tanto, el material instructorio. Está destinada a decidir si debe enjuiciarse a una persona y, en su caso, sobreseer la causa. Realiza un control negativo de la acusación, de carácter material. Se trata de que los intervinientes tomen conocimiento recíproco de las pretensiones jurídicas que se harán valer en el juicio y su sustento probatorio, de esa forma se permite que la defensa se prepare con la antelación suficiente para el inicio de un juicio, de ser la pretensión acusatoria la del representante del Ministerio Público (San Martín; 2015, 368). En este caso decide si la acusación parece fundada o verosímil –que sea suficiente o probable-, de manera que pueda tenerse por probable la imposición de una pena. Este enjuiciamiento condiciona el reconocimiento pleno de la pretensión y la consiguiente incoación del juicio oral. La concurrencia de dicho presupuesto materiales o de fundamentación material se identifica, a su vez, con la inexistencia de los motivos determinantes del sobreseimiento (art. 344.2 NCPP).

En consecuencia, la etapa intermedia cumple dos funciones, positivas o negativas, según el caso. Estas conducen al auto de sobreseimiento (art. 347 NCPP) o al auto de enjuiciamiento (art. 353 NCPP). Tanto el enjuiciamiento como el sobreseimiento aparecen como el correlato procedimental de dicho reconocimiento o denegación.

a) Función secundaria o accesorio

Es una función contingente, de integración y revisión del material investigativo. Las bases para decidir son las actuaciones de la investigación preparatoria. Si estas resultan insuficientes o defectuosas para resolver, el juez de la investigación preparatoria puede ordenar una investigación suplementaria (art. 346.5 NCPP). De igual forma, se asigna una función revisora consistente en la depuración de vicios o irregularidades en que hayan podido incurrir las diligencias instructoras como, por ejemplo, en el caso de que el Ministerio Público hubiera formalizado acusación penal omitiendo incorporar un requisito de procedibilidad (Ormazábal; 2002, 314).

Esta función conducirá, en su día, tanto a la corrección de la acusación (art. 350.2 y 350.1a NCPP) como la definición de los medios de defensa (art. 350.1b NCPP).

## **B. Características**

La etapa intermedia tiene carácter crítico, pues bajo el control judicial se determina si procede enjuiciar a una persona que ha sido previamente investigada. Otras características de esta etapa son:

- a) La dirige el Juez de la Investigación Preparatoria: El Nuevo Código Procesal Penal otorga la dirección de esta fase al juez de la investigación preparatoria, a diferencia del Código de Procedimientos Penales, en donde la fase intermedia no tiene mayor funcionalidad, pues el control de la acusación y la realización de los actos preparatorios del juicio le correspondían al propio tribunal encargado del juzgamiento (Pérez; 2011, 176).
- a) Es una fase funcional inherente al modelo acusatorio: La funcionalidad de la fase intermedia en el Nuevo Código Procesal Penal, tiene que ver mucho con la adopción del modelo acusatorio-adversativo, y se funda en la idea de que los juicios deben ser convenientemente preparados y de que sólo se puede llegar a ellos luego de una conveniente actividad responsable. En esta fase se tiene que decidir, previo debate en audiencia, sobre el requerimiento de sobreseimiento, el control sustancial y formal de la acusación, admitir la prueba ofrecida, resolver medios de defensa técnica, sanear el proceso y resolver las cuestiones que se plantean para preparar de la mejor manera el juicio en la audiencia preliminar, así como dictar el auto de enjuiciamiento (Talavera; 2009, 48).
- b) Evalúa la investigación preparatoria: El Juez de la Investigación preparatoria, en la fase intermedia debe decidir si hay causa o base para proceder a juicio; a esta conclusión sólo podrá llegar al examinar el conjunto de la investigación. Para lograr su cometido, el juez deberá respetar el contradictorio realizando una audiencia, bien sea sobre el

requerimiento de sobreseimiento o sobre la acusación, en la que las partes alegarán sus pretensiones y elementos de convicción que los sustentan.

- c) Control de la actuación fiscal: La separación del juez y órgano de acusación es el más importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio. Consustancial a este principio lo es el método de la contradicción, que se expresa en la exigencia de que haya un juez imparcial que controle la acusación, rechazándola o admitiéndola, en cuyo caso ordena la apertura del juicio. Un proceso correctamente estructurado tiene que garantizar que la decisión de someter a juicio al imputado no sea apresurada, superficial o arbitraria. Toda acusación debe ser fundada, esto es, que los elementos de convicción establezcan una probabilidad de que la persona acusada ha cometido el delito y de que existen pruebas que puedan probar ello en juicio. La fase intermedia cumple una función de discusión o debate preliminar sobre los actos o requerimientos conclusivos de la investigación. Es por ello que el Código Procesal Penal de 2004 autoriza a las partes a formular objeciones a la acusación, las mismas que pueden ser de fondo y de forma (Talavera; 2009, 47).

### **C. Fases**

Son dos: escrita y oral (San Martín; 2015, 372).

- a) Escrita. Tiene lugar desde la presentación del requerimiento fiscal hasta la apertura de la audiencia. Se discute si el plazo para la emisión

del requerimiento es de 10 a 15 días, vista la antinomia normativa existente: arts. 343.3 y 344.1 NCPP. La fase escrita está destinada a fijar el marco de la discusión que se realizara verbalmente en la audiencia, cuya base son las actuaciones de la investigación preparatoria, aco- piadas en el expediente fiscal. Consta de tres pasos: **1.** Traslados. **2.** Mociones de las partes. **3.** Citación a la audiencia. (San Martín; 2015, 372).

- a) Oral. Se inicia con la celebración de la audiencia y concluye con la resolución final respectiva. Constituye el hito central de la etapa inter- media, pues en ella se cumplen, de modo orla y contradictorio, las fun- ciones asignadas a la misma. Se fija, definitivamente, los hechos y las pruebas sobre las que versará el juicio oral y recaerá la sentencia. Ri- gen los principios procedimentales de oralidad e inmediación. El desa- rrollo de la audiencia es íntegramente oral. No se admiten escritos du- rante su desarrollo, y debe contar con la presencia ininterrumpida del juez de la investigación preparatoria, del fiscal de las partes y la de- fensa (art. 351º.1 y 2 NCPP). Garantiza el principio de inmediación la presencia de las partes –en especial del fiscal-, que se erige en un requisito de validez de la audiencia (San Martín; 2015, 372).

También rige el principio de concentración, pues en la audiencia deben debatirse todas las cuestiones e incidentes planteados por las partes. Rige, además, las demás reglas, en lo pertinente, de la audiencia, tales como el régimen de continuidad. La audiencia no es probatoria. Por tanto, no se actúan pruebas (San Martín; 2015, 372).

**D. Procedimiento** (San Martín; 2015, 373).

a) El fiscal tiene quince días para formular su requerimiento (art. 344.1 NCPP). El requerimiento se envía al juez de la investigación preparatoria con el expediente fiscal. Son dos los posibles sentidos del requerimiento fiscal: formular acusación, siempre que exista base suficiente para hacerlo: art. 344.1 NCPP, o solicitar el sobreseimiento: art. 344.2 NCPP. El Código Procesal Penal de 2004 establece 2 fases: el sobreseimiento y la acusación, figuras jurídicas cuyo análisis realizaremos a continuación.

- **SOBRESEIMIENTO:** Se entiende por sobreseimiento la resolución firme, emanada del órgano jurisdiccional competente en la fase intermedia, mediante el cual se pone fin al procedimiento penal incoado con la decisión que, sin actuar el *“ius puniendi”*, goza de la totalidad o de la mayoría de los efectos de la cosa juzgada.
- **ACUSACIÓN:** La acusación fiscal es el pedido fundamentado que formula el fiscal para que se inicie la etapa de juzgamiento contra el inculcado, por un hecho delictuoso determinado, al considerar que él es su autor, solicitando que se le imponga la pena prevista para dicho delito. El Código Procesal Penal de 2004 estipula que la acusación sea notificada a las partes, y que estas podrán observarla por defectos formales, deducir excepciones y otros medios de defensa que no hubieran sido planteados con anterioridad o se funden en hechos nuevos, solicitar la



imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada, pedir el sobreseimiento, instar la aplicación de un criterio de oportunidad, ofrecer pruebas para el juicio, objetar la reparación civil o reclamar su incremento o extensión, y plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio (Pérez; 2011, 180).

- a) Traslado a las partes apersonadas. El plazo para la presentación de mociones es de diez días: arts. 345. 2 y 350.1 NCPP.
- b) Celebración de la audiencia preliminar, que puede ser:
  - De control del requerimiento de sobreseimiento: art. 345.3 NCPP.
  - De control de la acusación: art. 350.1 NCPP.

Según el Nuevo Código Procesal Penal la audiencia preliminar se realiza ante el Juez de la investigación preparatoria, con la presencia obligatoria del Fiscal y el abogado defensor del acusado y antes del auto de enjuiciamiento. En esta audiencia, el Juez examinará las peticiones de las partes, pero sin entrar al fondo del asunto, sin actuar la prueba en ese momento, pues ello compete a la etapa de juzgamiento (Dueñas; 2006, 27).

Instalada la audiencia preliminar, el Juez otorgará la palabra por un tiempo breve y por su orden al Fiscal, a la defensa del actor civil, así como del acusado y del tercero civilmente responsable, los que debatirán sobre la procedencia o admisibilidad de cada una de las cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba ofrecida. El

Fiscal podrá en la misma audiencia, presentando el escrito respectivo, modificar, aclarar o integrar la acusación en lo que no sea sustancial; el Juez, en ese mismo acto correrá traslado a los demás sujetos procesales concurrentes para su absolución inmediata. Oralmente se alegará, debatirá y decidirá sobre las cuestiones siguientes: a) Hacer las modificaciones, aclaraciones subsanaciones que corresponda al dictamen acusatorio, siempre que sea posible: Si los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis del Ministerio Público, el Juez dispondrá la devolución de la acusación y suspenderá la audiencia por cinco días para que corrija el defecto, luego de lo cual se reanudará. En los demás casos, el Fiscal, en la misma audiencia, podrá hacer las modificaciones, aclaraciones o subsanaciones que corresponda, con intervención de los concurrentes. Si no hay observaciones, se tendrá por modificado, aclarado o saneado el dictamen acusatorio en los términos precisados por el Fiscal, en caso contrario resolverá el Juez mediante resolución inapelable; b) Resolver las excepciones y cualquier otro medio de defensa; de estimarse cualquier excepción o medio de defensa, el Juez expedirá en la misma audiencia la resolución que corresponda (Dueñas; 2006). Contra la resolución que se dicte, procede recurso de apelación. La impugnación no impide la continuación del procedimiento; c) El sobreseimiento, cuando concurren los requisitos señalados líneas arriba, siempre que resulten evidentes y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba; la

resolución desestimatoria no es impugnabile; d) realizar el juicio de admisión de los medios de prueba ofrecidos requiriéndose que la petición contenga la especificación del probable aporte a obtener para el mejor conocimiento del caso, y que el acto probatorio propuesto sea pertinente, conducente y útil. En este caso se dispondrá todo lo necesario para que el medio de prueba se actúe oportunamente en el Juicio (Pérez; 2011, 180).

No podrán actuarse diligencias de investigación o de prueba específicas, salvo el trámite de prueba anticipada y la presentación de prueba documental, para decidir cualquiera de las solicitudes señaladas en el párrafo anterior. Con el Nuevo Código Procesal Penal el Juez de la investigación preparatoria podrá rechazar una acusación que carezca de sustento o no tenga base para el juicio, disponiendo el sobreseimiento de la causa (Pérez; 2011, 180). Ello no significa que el Juez está autorizado a desestimar una acusación por duda, sino cuando el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírselo al imputado, no es típico, o no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Dicho en otras palabras, la desestimación de la acusación procederá cuando no haya causa probable o base para el juicio o cuando no se ofrezcan medios de prueba para su actuación en el juicio (Pérez; 2011, 181).

- c) Resolución de juez de la investigación preparatoria. Dictará auto de sobreseimiento (art. 347º NCPP) o auto de enjuiciamiento (art. 353 NCPP).
- d) Auto de citación a juicio por el juez penal: art. 355 NCPP.

Una vez resueltas las cuestiones planteadas en la audiencia preliminar, corresponde al Juez dictar el auto de enjuiciamiento, que entre otros requisitos debe contener los medios de prueba admitidos y el ámbito de las convenciones probatorias, así como la orden de remisión de los actuados al Juez encargado del juicio oral; esta resolución no es recurrible. Como se observa, el auto de enjuiciamiento es el producto de la audiencia preliminar pues contiene el nombre de los imputados y agraviados, el delito materia de acusación fiscal, los medios de prueba admitidos, el señalamiento de las partes constituidas en el proceso y el orden de envío de los actuados al juez. El juez se pronunciará sobre la procedencia o subsistencia de las medidas de coerción o su sustitución, disponiendo en su caso, la libertad del imputado, notificará el auto de enjuiciamiento al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales, y por último, dentro de las cuarenta y ocho horas de la notificación, el Juez de la Investigación Preparatoria hará llegar al Juez Penal que corresponda dicha resolución y los actuados correspondientes, así como los documentos y los objetos incautados, y se pondrá a su orden a los presos preventivos (Pérez; 2011, 183).

Recibidas las actuaciones por el Juzgado penal competente, éste

dictará el auto de citación a juicio con indicación de la sede del juzgamiento y de la fecha de la realización del juicio oral, salvo que todos los acusados fueran ausentes. La fecha será la más próxima posible, con un intervalo no menor de diez días (Pérez; 2011, 183). Cuando se estime que la audiencia se prolongará en sesiones consecutivas, los testigos y peritos podrán ser citados directamente para la sesión que les corresponda intervenir. Admitida la acusación a través del auto de enjuiciamiento, y en el marco de esta etapa intermedia, de pleno señorío del órgano jurisdiccional, las partes pueden ofrecer nuevos medios de defensa, ofrecer pruebas para el acto oral y la actuación de pruebas de urgencia. El objetivo de esta etapa es propender a celeridad mediante la vigencia del principio de concentración del juicio oral, con el cual se purga “*a limine*” el proceso de obstáculos procesales (Pérez; 2011, 183).

### **III.- MARCO TEORICO**

#### **3.1 LAS CONVENCIONES PROBATORIAS**

##### **A. Concepto:**

Las convenciones probatorias son acuerdos tomados entre las partes en un proceso penal. Estos acuerdos pueden versar sobre hechos, circunstancias o medios de prueba. De esta manera, si se conviene sobre cualquiera de los dos primeros, éstos serán tenidos por ciertos en el juicio oral y se dispensará de la carga de probarlos. En cambio, si se dispone que sólo determinada prueba será idónea para acreditar algún hecho, su

efecto será que no habrá otro medio que lo pueda probar.

Su utilidad se muestra, por citar uno de los casos, si sucede que existen puntos de encuentro respecto del tema central de debate o los accesorios a este, e incluso en los medios de prueba existentes. Por ejemplo, en el primer caso, que exista acuerdo respecto de la autoría material, pero la discusión resida en el tipo de responsabilidad o, en contrario, que se discuta la autoría material, pero no exista controversia en torno de la presencia en el lugar de los hechos. Lo que jurídicamente cabe no es solicitar la prueba por cada parte o practicarse esta en dos ocasiones, sino acceder al mecanismo de las convenciones probatorias, cuyo sentido y finalidad apunta, en concreto, a evitar discusiones inanes con claro desmedro de los principios de economía, celeridad y eficiencia procesal, entre otros (cuyo estudio lo profundizaremos más adelante).

De este modo, pues, la convención probatoria surge en el marco de la simplificación del proceso, en aras de la celeridad y economía procesal. Estos acuerdos están sujetos a la aprobación del juez de la investigación preparatoria para que, previa negociación y debate entre las partes durante la audiencia preliminar, se determine su vinculación al juez penal (unipersonal o colegiado). Aunque luego, y como último filtro de control, están sujetos a una eventual y excepcional revisión por parte de este último: se someterán, entonces, al reexamen judicial (CPP. 2 artículo 155°.4).

A. **Base Legal:**

El art. 350.2 NCPP autoriza a las partes, formulada acusación fiscal, proponer tanto los hechos que aceptan y que el juez dará por acreditados, cuanto los medios probatorios que serán necesarios para que determinen hechos se estimen probados, de manera que se produce una simplificación del proceso, en aras de la celeridad y economía procesal. La idea material que preside esta novísima institución es que solo se prueba los hechos controvertidos, salvo que se trate de hechos especialmente relevantes, presupuesto de los hechos no controvertidos. Por consiguiente, *hechos controvertidos* son todos aquellos hechos relevantes, rechazados de uno u otro modo por alguna de las partes, y que no han sido materia expresa de una convención probatoria, bajo el entendido que el silencio sobre un hecho no puede considerarse en caso alguno como admisión. En esta perspectiva, se acepta la limitación probatoria respecto de los *hechos admitidos* expresamente, que son aquellos en que ambas partes están de acuerdo en cuanto a su producción-, salvo que se sospeche fraude o que la ley exija una acreditación específica. Solo en este supuesto se entiende que la prueba se torna innecesaria.

La extensión de la convención probatoria es amplia: se puede aceptar el hecho principal y discutir ámbitos secundarios, así como es posible aceptar medio de prueba específicos para probar un hecho concreto, circunscribiendo de este modo la libertad de prueba, cuya tolerabilidad está en el consenso entre las partes. No puede aceptarse convenciones probatorias en torno a la responsabilidad penal por la comisión del delito (Ugaz; 2011, 22).

Los hechos secundarios –como ya se ha destacado- también podrán ser objeto de convención probatoria, pues estos van a servir como premisas de inferencia cuya conclusión verse sobre el hecho principal, y de esta manera son relevantes para verificar la realización del hecho punible (Ugaz; 2011, 22).

B. **CONVENCIONES PROBATORIAS Y PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL.**

En esta parte se analizarán los principios procesales que refuercen la posibilidad de desarrollar acuerdos sobre pruebas, los que la permitan y los que, eventualmente, se encontrarían en conflicto con esta opción. Se releva profundizar sobre los principios a los cuales las estipulaciones probatorias le son en sí sencillamente inocuas, por estar pensado en otras situaciones, como el de preclusión o eventualidad, el de concentración, de la función preventiva del proceso penal, de la presunción de inocencia, entre otros (Ugaz; 2011, 23).

**a) Convenciones probatorias y el principio dispositivo**

El nuevo modelo procesal penal se inclina preferentemente hacia el principio dispositivo, ya no al inquisitivo. Entre los aspectos que diferencian un principio del otro tenemos que el dispositivo otorga a las partes la iniciativa del proceso, tanto para iniciarla, como para disponer de determinados actos procesales. En cambio, el inquisitivo le atribuye todas esas facultades al juzgador, encargado de encontrar la verdad.

Una de las implicancias de seguir el principio dispositivo en materia



procesal, está referida a la prueba. El juez no puede incorporar más hechos de los que las partes aleguen, ni puede solicitar prueba de oficio. El tratadista Hugo Alsina encuentra como una de las reglas fundamentales del “sistema dispositivo” el que el juez debe tener por ciertos los hechos en que aquéllas [las partes] estuviesen de acuerdo (ubí partís sunt concordēs nihil ab iudiciē).

Es preciso recordar que el proceso penal no es “propiedad” de las partes, como tampoco lo es ningún tipo de proceso judicial, su naturaleza es de Derecho público; entonces, en lo que nos interesa a los fines de esta investigación, el principio dispositivo no puede significar que las partes tengan absoluta y plena libertad para convenir en lo que quieran y que por el solo hecho de hacerlo esto será aprobado. El principio se encuentra reglado, pero, en esencia, permite el acuerdo (Ugaz; 2011, 23).

**a) Convenciones probatorias y cumplimiento del principio de economía procesal:**

El principio de economía procesal se entiende como aquel que busca obtener el pronunciamiento judicial utilizando el menor esfuerzo de las partes e inclusive del Estado, con un menor gasto pecuniario. Este principio se suele resumir en la aforisma: mayor eficacia con ahorro de gastos, esfuerzos y dinero.

Con el eximir de ser probados ciertos hechos se cumple la finalidad de obtener un juicio oral más breve, con menos pruebas que tendrán que actuarse; y por tanto con un pronunciamiento del juzgador que no tenga que perderse en evaluar lo evidente, impertinente, o

simplemente no cuestionado, resultando en una sentencia breve y concisa sobre sólo lo trascendente que fue actuado en el juicio oral.

**b) Convenciones probatorias y el principio de celeridad procesal:**

La celeridad de un proceso en donde hubo convenciones probatorias es evidente por la menor carga probatoria que se hace presente en el juicio oral. Por eso, quienes participan en este procedimiento ajustan su actuación de tal modo que se dota al trámite procesal de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento (Ugaz; 2011, 24).

El derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas – reconocido en el artículo 14' numeral 2' literal “e” del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- implica un equilibrio razonable entre el principio de celeridad y el derecho de defensa; es aquí donde se hallan los límites a la aplicación de las convenciones. El principio de celeridad, que tiende a que el proceso se adelante en el menor lapso posible, debe armonizarse con el derecho de defensa, que implica que la ley debe prever un tiempo mínimo para que el imputada pueda comparecer al juicio y pueda preparar adecuadamente su defensa (Ugaz; 2011, 24).

El Tribunal Constitucional (TC) nacional señala que “... si bien ha de procurarse la rapidez y la prontitud para llegar a una resolución en todo proceso judicial, inclusive penal, y más aún en uno sumario, ello no

puede desvirtuar la protección de la persona como fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1º de la Constitución). Todo acto de celeridad debe tener como propósito esencial el respeto del derecho a la tutela procesal efectiva. Tal sentido fluye de lo dispuesto por el artículo 1250 del Código de Procedimientos Penales, el mismo que determina que si el inculpado invoca hechos o pruebas en su defensa, estos deben ser verificados por el juzgador en el plazo más breve” (Ugaz; 2011, 24).

De lo dicho en este apartado, se encuentra que, con el debido respeto al derecho de defensa, las convenciones probatorias no hacen más que encaminar el proceso al logro de una respuesta pronta de parte del juez. El principio de celeridad orienta también este tipo de actos.

**c) Convenciones probatorias y los principios de buena fe y lealtad procesal:**

Nuevamente recordemos la naturaleza pública del proceso judicial, no se tratan de actos particulares libres del respeto a normas imperativas, en los que los sujetos puedan traicionarse sin consecuencia alguna. La buena fe es exigencia dentro del proceso, ya que están involucrados intereses superiores a la disputa material.

Como consecuencia de este principio se le exige a las partes la lealtad procesal en sus actos. También se deriva la veracidad de las alegaciones efectuadas (Ugaz; 2011, 25).

Aparentemente este principio no fundamenta la celebración de acuerdos sobre pruebas o circunstancias de hechos; sin embargo, se nota la exigencia de su respeto cuando hay consecuencias para su

incumplimiento. Si bien no hay una nulidad directa del acuerdo por mala fe, más aún cuando las resoluciones al respecto no son recurribles (artículo 352°. 6), hay medios indirectos para lograr la ineficacia de tal convención. De este modo, en la audiencia de control de acusación, las partes (fiscal, defensa de actor civil, del acusado y del tercero civilmente responsable, en ese orden de prelación, según el artículo 351°. 3) podrán, entre otras cosas, exponer sus puntos de vista sobre la validez del acuerdo, es éste el momento donde se debe denunciar la felonía en la negociación, entendiéndose que, por lo escuchado en la audiencia, es cuando por fin puede observársela. A su criterio, pero motivando debidamente, el juez podrá sancionar deslealtad con la desaprobación del acuerdo (Ugaz; 2011, 25).

Además, incluso el juez penal de la causa puede desvincularse del acuerdo, mediando un reexamen del auto que admitió la convención probatoria (artículo 155 4). Y no hay inconveniente para que la parte afectada por la mala fe de la otra pueda solicitarle al juez que de oficio reexamine el acuerdo aprobado. Hay que ver que no se esté sancionando la mala fe de uno con la mala fe del otro, no lo dice la norma, pero su desvinculación debe prever que quien le solicite tal actuación, no debió conocer el defecto que denuncia (Ugaz; 2011, 25).

**d) Convenciones probatorias y el principio de igualdad procesal:**

El Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho de igualdad procesal o de igualdad de armas se deriva de la interpretación sistemática del artículo 2, inciso 2, (igualdad) y del artículo 138, inciso 2 (debido proceso), de la Constitución, En tal sentido, todo proceso,

judicial, administrativo o en sede privada, debe garantizar que las partes del proceso detenten las mismas oportunidades de alegar, defenderse o probar, de modo que no se ocasione una desventaja en ninguna de ellas respecto a la otra. Tal exigencia constituye un componente del debido proceso ya que ningún proceso que inobserve dicho imperativo puede reputarse como “debido” (Ugaz; 2011, 25).

Por su parte, según la Corte Constitucional de Colombia, la expresión “igualdad de armas” utilizada por la doctrina internacional se traduce en el orden interno en igualdad de oportunidades frente al juez, entre la Fiscalía y la defensa, “razón por la cual en el nuevo sistema las competencias que antes ejercía ante sí el ente investigador y acusador, pasaron a control previo o posterior de los jueces de control de garantías, en beneficio del garantismo penal”.

La exposición de motivos del Anteproyecto del nuevo Código procesal Penal señala que el proceso se desarrolla conforme a los principios de contradicción e igualdad, como uno de los principios rectores que forman parte de la estructura del nuevo proceso penal así como de las instituciones contenidas en éste (Ugaz; 2011, 25).

Así, en los acuerdos de convenciones probatorias, las partes se presentan en igualdad de términos, es decir con la información que figura en el expediente, y que el Fiscal ha descubierto en él como resultado de sus investigaciones; ésta es la manera en que pueden sentarse a establecer lo que no debe ser probado en el juicio, sin poseer, el acusado, desventajas de información, y el fiscal habiendo terminado su investigación, ambos acudiendo voluntariamente a las

conversaciones (Ugaz; 2011, 25).

La igualdad de las partes se satisface con la potencial igualdad de armas en la negociación, no quiere decir que finalmente el producto sea inocuo para ambos, van a obtener beneficios cada uno, pero, obviamente, alguno debe sacar mayor provecho que el otro (Ugaz; 2011, 25).

e) **Convenciones probatorias y principio de razonabilidad:**

El nuevo sistema, que se manifiesta en instituciones como las convenciones probatorias, no se fundamenta en una mera orientación utilitaria, tributaria de la eficiencia procesal a través de una renuncia al plazo razonable para un juzgamiento acorde con el debido proceso; sino que no olvida los otros principios que rigen el debido proceso como el principio de razonabilidad (derivado del principio lógico de la razón suficiente, propuesto por Leibniz y desarrollado magistralmente por Shopenhauer) que expresa el ejercicio de la razón como regla y medida de los actos humanos y que se refleja en las convenciones probatorias en la medida que las partes se dan cuenta que sería perjudicial para ellas el no realizar estas convenciones. Asimismo, orienta a la judicatura y le permite no aprobar un acuerdo o ejercer la prerrogativa del reexamen cuando haya una manifiesta e importante desprotección a los fines supremos apuntados por el proceso penal (Ugaz; 2011, 25).

**PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL:**

El principio de economía procesal se entiende como aquel que busca

obtener el pronunciamiento judicial utilizando el menor esfuerzo de las partes e inclusive del Estado, con un menor gasto pecuniario. Este principio se suele resumir en el aforisma: mayor eficacia con ahorro de gastos, esfuerzos y dinero.

Con el eximir de ser probados ciertos hechos se cumple la finalidad de obtener un juicio oral más breve, con menos pruebas que tendrán que actuarse; y por tanto con un pronunciamiento del juzgador que no tenga que perderse en evaluar lo evidente, impertinente, o simplemente no cuestionado, resultando en una sentencia breve y concisa sobre sólo lo trascendente que fue actuado en el juicio oral.

#### **PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL:**

La celeridad de un proceso en donde hubo convenciones probatorias es evidente por la menor carga probatoria que se hace presente en el juicio oral. Por eso, quienes participan en este procedimiento ajustan su actuación de tal modo que se dota al trámite procesal de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o vulnere el ordenamiento (Ugaz; 2011, 24).

#### **APLICACIÓN DE LAS CONVENCIONES PROBATORIAS EN LA ETAPA**

##### **INTERMEDIA.**

#### **E. Concepto:**

Se constituye como la segunda etapa del proceso penal y está referida a la serie de actuaciones procesales que tiene lugar desde que concluye la investigación preparatoria hasta la emisión del auto de citación a juicio (arts. 343.1 y 345 NCPP). Su base legal se encuentra en la Disposición de conclusión de investigación preparatoria: art. 343.1 NCPP o, en su defecto, en el auto de conclusión: art. 343.3 NCPP (San Martín; 2015, 367).

En cuanto a su función como filtro, existen múltiples enfoques que lo fundamentan, relacionados con el análisis económico del derecho, con la gestión de audiencias, con la justicia restaurativa, así como con criterios de merecimiento y necesidad de pena. Todos estos criterios concurren en la audiencia preliminar de la fase intermedia para impedir que se continúe un juicio que puede concluir por medio de negociación, por medio de reparación, por un análisis de costo beneficio, o simplemente porque la pena no es necesaria (Ramos; 2007, 29).

Puede definirse como aquella etapa en la que tras el examen de los resultados de la investigación preparatoria se decide sobre la denegación o el reconocimiento de la pretensión penal mediante un examen de sus presupuestos materiales y procesales, ordenando en consecuencia la apertura del juicio o el sobreseimiento de la causa. Desde el punto de vista procedimental la etapa intermedia es bifronte, pues mira, de un lado, a la investigación preparatoria, para resolver su correcta clausura o el archivo de la causa (arts. 345.2, 346.5, 346.1, 347.2 y 352.4 NCPP). Tiene autonomía propia (San Martín; 2015, 367).



## **F. Funciones:**

Está sujeta a dos grandes funciones: principal y secundaria o accesorio.

### **b) Función Principal**

Su objeto es el examen de la fundamentación fáctica y jurídica del requerimiento fiscal y de los presupuestos de admisibilidad del juicio oral; revisa, por tanto, el material instructorio. Está destinada a decidir si debe enjuiciarse a una persona y, en su caso, sobreseer la causa. Realiza un control negativo de la acusación, de carácter material. Se trata de que los intervinientes tomen conocimiento recíproco de las pretensiones jurídicas que se harán valer en el juicio y su sustento probatorio, de esa forma se permite que la defensa se prepare con la antelación suficiente para el inicio de un juicio, de ser la pretensión acusatoria la del representante del Ministerio Público (San Martín; 2015, 368). En este caso decide si la acusación parece fundada o verosímil –que sea suficiente o probable-, de manera que pueda tenerse por probable la imposición de una pena. Este enjuiciamiento condiciona el reconocimiento pleno de la pretensión y la consiguiente incoación del juicio oral. La concurrencia de dicho presupuesto materiales o de fundamentación material se identifica, a su vez, con la inexistencia de los motivos determinantes del sobreseimiento (art. 344.2 NCPP).

En consecuencia, la etapa intermedia cumple dos funciones, positivas o negativas, según el caso. Estas conducen al auto de sobreseimiento (art. 347 NCPP) o al auto de enjuiciamiento (art. 353 NCPP). Tanto el

enjuiciamiento como el sobreseimiento aparecen como el correlato procedimental de dicho reconocimiento o denegación.

**c) Función secundaria o accesorio**

Es una función contingente, de integración y revisión del material investigativo. Las bases para decidir son las actuaciones de la investigación preparatoria. Si estas resultan insuficientes o defectuosas para resolver, el juez de la investigación preparatoria puede ordenar una investigación suplementaria (art. 346.5 NCPP). De igual forma, se asigna una función revisora consistente en la depuración de vicios o irregularidades en que hayan podido incurrir las diligencias instructoras como, por ejemplo, en el caso de que el Ministerio Público hubiera formalizado acusación penal omitiendo incorporar un requisito de procedibilidad (Ormazábal; 2002, 314).

Esta función conducirá, en su día, tanto a la corrección de la acusación (art. 350.2 y 350.1ª NCPP) como la definición de los medios de defensa (art. 350.1b NCPP).

**Características:**

La etapa intermedia tiene carácter crítico, pues bajo el control judicial se determina si procede enjuiciar a una persona que ha sido previamente investigada. Otras características de esta etapa son:

- d) La dirige el Juez de la Investigación Preparatoria: El Nuevo Código Procesal Penal otorga la dirección de esta fase al juez de la investigación preparatoria, a diferencia del Código de Procedimientos

Penales, en donde la fase intermedia no tiene mayor funcionalidad, pues el control de la acusación y la realización de los actos preparatorios del juicio le correspondían al propio tribunal encargado del juzgamiento (Pérez; 2011, 176).

- e) Es una fase funcional inherente al modelo acusatorio: La funcionalidad de la fase intermedia en el Nuevo Código Procesal Penal, tiene que ver mucho con la adopción del modelo acusatorio-adversativo, y se funda en la idea de que los juicios deben ser convenientemente preparados y de que sólo se puede llegar a ellos luego de una conveniente actividad responsable. En esta fase se tiene que decidir, previo debate en audiencia, sobre el requerimiento de sobreseimiento, el control sustancial y formal de la acusación, admitir la prueba ofrecida, resolver medios de defensa técnica, sanear el proceso y resolver las cuestiones que se plantean para preparar de la mejor manera el juicio en la audiencia preliminar, así como dictar el auto de enjuiciamiento (Talavera; 2009, 48).
- f) Evalúa la investigación preparatoria: El Juez de la Investigación preparatoria, en la fase intermedia debe decidir si hay causa o base para proceder a juicio; a esta conclusión sólo podrá llegar al examinar el conjunto de la investigación. Para lograr su cometido, el juez deberá respetar el contradictorio realizando una audiencia, bien sea sobre el requerimiento de sobreseimiento o sobre la acusación, en la que las partes alegarán sus pretensiones y elementos de convicción que los sustentan.
- g) Control de la actuación fiscal: La separación del juez y órgano de

acusación es el más importante de todos los elementos constitutivos del modelo teórico acusatorio. Consustancial a este principio lo es el método de la contradicción, que se expresa en la exigencia de que haya un juez imparcial que controle la acusación, rechazándola o admitiéndola, en cuyo caso ordena la apertura del juicio. Un proceso correctamente estructurado tiene que garantizar que la decisión de someter a juicio al imputado no sea apresurada, superficial o arbitraria. Toda acusación debe ser fundada, esto es, que los elementos de convicción establezcan una probabilidad de que la persona acusada ha cometido el delito y de que existen pruebas que puedan probar ello en juicio. La fase intermedia cumple una función de discusión o debate preliminar sobre los actos o requerimientos conclusivos de la investigación. Es por ello que el Código Procesal Penal de 2004 autoriza a las partes a formular objeciones a la acusación, las mismas que pueden ser de fondo y de forma (Talavera; 2009, 47).

#### **IV.-**

#### **ANÁLISIS DEL PROBLEMA**

Se plantea las posibles soluciones al problema, para lo cual se puede utilizar cualquiera de las fuentes del derecho (la ley, la doctrina y la jurisprudencia), ya sea nacional o del derecho comparado.

Las Convenciones Probatorias sin bien, es cierto de encuentra regulado en el artículo 352° del Código Procesal Penal, lo que comprende la sección II de la etapa intermedia, para que un medio de prueba no sea actuada en Juicio Oral, sin embargo, las partes procesales ni los operadores jurídicos lo aplicaban desde su regulación normativa. Son pocos los abogados penalistas que realizan estudios sobre esta institución, por lo que no se cuenta con mucha información bibliográfica al respecto. Otro apunte, esta vez de naturaleza jurisprudencial, es el contenido en los alcances de la Casación 012 – 2010 – HUAURA en el que se toca de manera medular la figura de las convenciones probatorias y se señala que ya no se puede retrotraer la interpretación y el acuerdo sobre la prueba al que arribaron las partes en la etapa intermedia.

**V.**

**CONCLUSIONES**

1. LAS CONVENCIONES PROBATORIAS SON UNA INSTITUCIÓN PROCESAL QUE SE ENCUENTRA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 350° INCISO 2) Y 352° INCISO 6) DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, Y CONSISTE EN EL ACUERDO DE HECHOS PROBADOS POR LAS PARTES PROCESALES.
  
1. RESULTA IMPORTANTE LA APLICACIÓN DE LAS CONVENCIONES PROBATORIAS EN EL PROCESO PENAL POR CUANTO SIMPLIFICA UN PROCESO, LAS PARTES SE VEN BENEFICIADAS, GENERANDOLES MENOS GASTO Y DISMINUYE LA CARGA PROCESAL EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

## **VI.**

### **RECOMENDACIONES**

Al ser Las convenciones probatorias acuerdos tomados entre las partes en un proceso penal, sobre hechos, circunstancias o medios de prueba, se recomienda que las partes procesales, así como los operadores jurídicos utilicen esta institución jurídica procesal.

Las instituciones que administración justicia en nuestro País, deberían difundir el uso de la Convenciones probatorias, en aras de una simplificación del proceso, celeridad y economía procesal.

**LIBROS**

1. Arana, W. (2014). “Manual de Derecho Procesal Penal”. Editorial Gaceta Jurídica. Primera edición.
1. Angulo P. (2004). “Proceso Penal y búsqueda de la verdad”. Gaceta Jurídica. Lima – Perú.
2. Calsin Coila, H. J. (2015). Prueba indiciaria en la investigación preliminar y su implicancia en el archivamiento de las denuncias penales. Revista Investigaciones Altoandinas. , ISSN 2306-8582, Vol. 17, N°. 1, págs. 125-132
3. Castillo, J (2006). “Jurisprudencia penal”. N.º 03, Grijley, Lima-Perú.
4. Chocano, P. (2008). Derecho probatorio y derechos humanos. 2da. Edición. Lima: Idemsa.
5. Climent, C. (2005). “La prueba penal”. Tomo I. Edit. Tirant Lo Blanch. Valencia – España.
6. Gonzales-Cuéllar, N. (2006). “Investigación y prueba en el proceso penal”. Editorial Colex. Madrid – España.
7. Hernández, J. et al (2004). “Metodología de la Investigación”. Cuarta Edición. Edit. McGraw-Hill Interamericana.



8. Miranda, M (2012). “La prueba en el proceso penal acusatorio”. Jurista Editores E.I.R.L. Lima – Perú.
9. Peña Cabrera, A (2015). “Derecho Penal – Parte General”. Tomo IV. Quinta Edición. IDEMSA. Lima – Perú.
10. Prado, V (2016). “Consecuencias jurídicas del delito. Giro punitivo y nuevo marco legal”. Editorial IDEMSA. Lima – Perú.
11. Reyna, L. (2011). “El proceso penal aplicado, conforme al Código Procesal Penal de 2004”. Editora Grijley. Lima.
12. Talavera, P. (2007) “El Nuevo Código procesal penal”. Grijley, Lima - Perú.
13. Talavera, P (2009) “La prueba en el nuevo proceso penal”. Academia de la Magistratura. Perú.